

**RELOCALIZADOS, AFECTADOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA DEMANDA REIVINDICATIVA. LA EXPERIENCIA ORGANIZATIVA DE UNA POBLACIÓN DESPLAZADA.**

RELOCATED, AFFECTED AND CLAIM DEMAND CONSTRUCTION. THE EXPERIENCE OF A DISPLACED POPULATION.

**Walter Fernando Brites**

CONICET. Universidad Nacional de Misiones y Universidad de la Cuenca del  
Plata

[briteswalter@yahoo.com.ar](mailto:briteswalter@yahoo.com.ar)

**Resumen**

Este trabajo aborda el caso de un conjunto habitacional de población relocalizada en la periferia urbana segregada de la ciudad de Posadas, Argentina. El análisis gira en torno a cómo el desplazamiento más allá de segregar generó un conjunto de adversidades vinculado a la carencia de servicios y equipamientos básicos, provocando la emergencia de diversas iniciativas colectivas, así como demandas, conflictos y movimientos de pobladores relocalizados.

En grandes rasgos, junto con estas acciones emergieron demandas reivindicativas que tomaron formas de protestas y resistencia, pero también hubo instancias más conciliadoras como las mesas de gestión asociada gobierno-vecinos. Las dos formas de acción colectiva ofrecen márgenes para la capacidad de agencia, la participación y alternativas de organización vecinal. En este sentido, adquiere importancia el análisis de hechos y procesos en los que se desenvuelven la participación, los conflictos, las formas de deliberación y las estrategias reivindicativas.

## Abstract

This paper analyzed the case about housing complex of population relocated, that has been segregated to urban periphery, in the city of Posadas, Argentina. The analysis focuses on as the segregation, creates problems and adversities, linked to the lack of basic services and infrastructure, causing the emergence of collective initiatives, complaints, conflicts and movements of relocated residents.

In general terms, between these actions have emerged forms of protest and resistance, and secondly, conciliatory processes, like instances associated management of government-neighbors. The two forms of collective action give rise to margins of agency, participation and local organizational alternatives. In this sense, is important the analysis of facts and processes in that the participation, conflict, forms of deliberation and claims strategies takes shape.

**Palabras claves:** Acción colectiva. Demandas reivindicativas. Conjunto habitacional. Relocalización. Segregación.

**Keywords:** Collective action. Claims demands. Housing complex. Relocation. Segregation.

## Introducción

En este artículo se analizan dos modalidades de acción colectiva, a través de las cuales los pobladores de un conjunto habitacional, fueron organizándose para generar diversas iniciativas de solución a los agudizados problemas del nuevo hábitat. Así se aborda por un lado, los procesos de *gestión asociada* instalados en el barrio a través de las denominadas *mesas interactorales* y; por otro lado, las actividades desplegadas por los *movimientos reivindicativos* y *grupos de presión*, muchas veces constituidos como Asociaciones Civiles.

Las mesas interactorales de gestión asociada establecen un escenario público de deliberación que convoca periódicamente a vecinos, funcionarios o

técnicos gubernamentales y miembros de asociaciones del barrio, a fin de planificar acciones conjuntas que contribuyan a solucionar problemas referidos a la dimensión del hábitat. A través de estos espacios de gestión, no solo se han encontrado diversas soluciones, sino que se han instalado mecanismos posibilitantes de nuevas prácticas participativas a escala barrial.

Los movimientos reivindicativos generados por grupos de presión, son desencadenados tanto a través del actuar más informal de las organizaciones vecinales, como así de las consolidadas Asociaciones Civiles. Estas últimas, son la mayoría de las veces grupos constituidos antes del proceso de relocalización por lo que poseen una trayectoria organizativa. Generalmente reivindican no solo cuestiones relacionadas al hábitat, como la provisión de bienes y servicios colectivos, sino fuentes de trabajo, recursos de subsistencia y diversos modos de asistencialismo; para ello, apelan principalmente al enfrentamiento y el conflicto como mecanismo de demanda y negociación ante el principal interlocutor, el ente relocalizador: “Entidad Binacional Yacyretá (de ahora en más EBY).

Ambas modalidades de acción colectiva son complementarias en su incidencia sobre los problemas socio-comunitarios. La naturaleza de los problemas que emergen, los actores y estrategias de participación y/o lucha, se cruzan y complementan alternadamente en el tiempo en función de nuevas necesidades, coyunturas políticas e intereses. Actores de las mesas han participado de los movimientos reivindicativos de protesta y miembros de estos movimientos se han involucrado en las mesas, motivados por algunos temas de discusión. De modo que la tipología de acción colectiva, aquí construida es solo analítica. En términos empíricos, no ha existido un área específica de problemas en el conjunto habitacional, que aproxime en forma exclusiva una modalidad de acción vecinal.

Lejos de proponer una visión que relacione, las necesidades materiales y las acciones reivindicativas vecinales de manera lineal y mecánica; la perspectiva sugerida analiza la convergencia de variadas acciones colectivas que incorporan las características de los actores, su trayectoria organizativa, la territorialidad, las redes sociales, la capacidad de agencia, la práctica política y

el poder. El análisis de la conjunción de estos elementos, nos permite elaborar una perspectiva socio-antropológica de la acción colectiva y su incidencia sobre el hábitat, pudiendo así, explicar y comprender sus efectos y alcances.

En el marco de estas consideraciones, se opta aquí, por construir una perspectiva teórica y conceptual que posibilite una aproximación a la noción de acción colectiva de manera más amplia, incorporando aquellas dimensiones necesarias para desentrañar las prácticas organizativas y reivindicativas de la población relocalizada. De acuerdo con Melucci (1999), la acción colectiva supone un *sistema de acción* que implica una pluralidad de dimensiones de variada complejidad, en un proceso donde emergen cuestiones referidas a los motivos de la acción, el involucramiento de los actores, los modos del actuar colectivo, la construcción de un nosotros a través de la acción, las prácticas políticas, la gestación de una acción común, las relaciones que sostienen el actuar colectivo, etc.

A través de la acción colectiva, “los individuos interactúan, se influyen recíprocamente y negocian, para definirse como actor colectivo y para delimitar el ámbito de su acción” (Melucci, 1989:32). Como correlato a la acción colectiva, emerge la “identidad colectiva”, un concepto que es clave para Melucci, en la medida en que permite entender la construcción de un nosotros en la acción. El nosotros va emergiendo de las vivencias compartidas, de la co-implicación surgidas de las experiencias comunes, de los juicios y valoraciones que se van construyendo colectivamente. Así, la acción colectiva constituye un *proceso, un sistema de acción* en el que una pluralidad de actores construye y dota de sentidos a sus acciones. “Sentido e identidad como relación, como proceso y como representación simbólica son los elementos de una teoría de la acción colectiva que deviene teoría de la acción para una sociedad compleja” (Scribano, 2009:252).

Conjuntamente con la acción colectiva, la noción de agencia de Giddens (1985), sea quizás un elemento importante para comprender la acción creativa/trasformativa de los individuos frente a las limitaciones del sistema; reconociendo de cierto modo el potencial de los actores sociales para subvertir o paliar situaciones de adversidad estructural. Mientras los efectos de la

relocalización y la segregación son parte de esos nuevos constreñimientos estructurales, la organización, la movilización y la acción reivindicativa son un conjunto de prácticas que liberan la agencia.

Teniendo como base teórica-epistemológica la categoría de acción colectiva como un *sistema de acción*, se aborda aquí el análisis empírico de las diversas formas del actuar colectivo gestadas en el conjunto habitacional estudiado, así por ejemplo: las experiencias asociativas vecinales, las prácticas y la construcción de representaciones e identidades colectivas.

### **El contexto local**

La ciudad de Posadas se ubica a orillas del río Paraná, frente a la ciudad paraguaya de Encarnación, desde 1878 ha funcionado como capital de la provincia de Misiones, constituyéndose en centro administrativo, comercial y de servicios para una provincia cuya economía se basa fundamentalmente en la producción agropecuaria y agroindustrial. Actualmente con más de 320.000 habitantes la ciudad, se ha transformado en uno de los núcleos urbanos (de tamaño medio) más importante de la región; y, las transformaciones generadas pueden ser atribuidas a tres fuentes principales: a) un crecimiento demográfico acelerado por el flujo migratorio de población rural, debido a la prolongada crisis del sector agrario, b) el vertiginoso crecimiento y expansión de la trama urbana; y c) el impacto generado por la represa de Yacyretá, los programas de desarrollo urbano y relocalización.

De manera específica el proyecto Hidroeléctrico Yacyretá, ha impuesto una impronta particular sobre el espacio urbano de Posadas, al contribuir a un inédito proceso de segregación a partir de programas de relocalización. El funcionamiento de la Represa, a cota 83 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) impone en la región, la formación de un lago de 140.000 hectáreas, generando dramáticas consecuencias para la ciudad; como la inundación del 8,24% del territorio municipal (2.568,83 hectáreas), alrededor de 3.000 propiedades y la relocalización de aproximadamente 25.000 habitantes, asentados en las costas del río Paraná y arroyos urbanos.

Entre otros efectos, los procesos de relocalización han generado una mayor *segregación urbana*, entendida como la “tendencia a la organización del espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social entre ellas, entendiéndose esta disparidad no sólo en términos de diferencia, sino de jerarquía” (Castells, 1999:203). Esta segregación además es concebida como un proceso forzado e involuntario a residir en un lugar determinado, que además genera exclusión y discriminación de sus habitantes (Marcuse, 2004).

La amplia distancia (alrededor de 15 km.) que separa a los conjuntos habitacionales de población relocalizada, con respecto a las áreas céntricas de la ciudad, es uno de los impactos negativos. El acceso al mercado de trabajo urbano requiere el pago del transporte, además en los nuevos conjuntos hay deficiencias de infraestructura y servicios. Por otro lado, el aislamiento físico/espacial impone variadas limitaciones en términos de relación entre estratos sociales. Así como sostienen y Snyder (1997: 22) “no hay contrato social sin contacto social”. De este modo, más que desintegración, la segregación genera un nuevo modelo de integración social urbana; en el que la distancia física, de alguna forma, repercute sobre la distancia social.

Apelando al análisis de un caso la investigación se centra en uno de los cinco grandes conjuntos habitacionales, al que de manera ficticia se denomina aquí: San Alberto. Localizado en las afueras de Posadas, San Alberto encuentra sus orígenes en el año 1998, cuando a partir de sucesivos programas de relocalización comenzó el gradual traslado de familias de las zonas de afectación del embalse (la costa ribereña y arroyos urbanos). El proceso de poblamiento del conjunto habitacional finalizó hacia el año 2004, al construirse más de 1.664 viviendas. Actualmente ese conglomerado alberga a una población cercana a los 10.000 habitantes.

Desde sus inicios la población se ha venido conformando por familias en condiciones de pobreza e incertidumbre reproductiva: grupos numerosos; bajos ingresos; nivel elevado de desocupación, etc. Los frecuentes problemas de la economía doméstica están relacionados con las dificultades de inestabilidad de ingresos monetarios. El servicio doméstico y la realización de una gran

variedad de actividades informales enmarcadas en la modalidad de “changas” (corta pastos, albañiles, etc.), constituyen las principales opciones laborales. Aunque relevamientos oficiales realizados en el conjunto señalan que el 42% de los jefes de hogares atraviesan por situación de desempleo.

La masificación de planes sociales (Plan Jefe de Hogar o Plan Familia, y más recientemente la Asignación Universal por Hijo), garantizan mínimos ingresos monetarios que aún son insuficientes. Por otro lado, la acción de asistencia alimentaria brindada desde la EBY, a partir de la administración de 9 comedores comunitarios distribuidos a lo largo y ancho del conjunto, hace que muchas familias, más allá de las situaciones de pobreza por la que atraviesan, encuentren recursos de subsistencia, básicos y necesarios.

### **El acaecer de los movimientos reivindicatorios**

San Alberto, en tanto mega-conjunto habilitado a partir de masivos programas de relocalización que han segregado socio-espacialmente a hogares en un territorio periférico, generó además problemas colectivos y diversas formas de manifestaciones vecinales como intentos organizativos de solución. Una de estas acciones colectivas son los movimientos reivindicativos generados por asociaciones civiles y organizaciones vecinales.

Los movimientos reivindicativos se desarrollaron sobre la base de la demanda abierta y conflictiva de cara a las instituciones del Estado y enfrentando principalmente a la EBY. A través de esta vía, los vecinos interpretaron que la provisión de servicios colectivos es de responsabilidad ineludible del gobierno y por lo tanto, el reclamo fue el mecanismo considerado más razonable.

Dado el tiempo transcurrido, y la escasa estructuración de las organizaciones no resulta fácil reconstruir el proceso de constitución de las organizaciones que fueron conformándose en el conjunto habitacional. Aunque sí, en la actualidad es posible conocer y recomponer sus patrones de organización, sus objetivos, sus estrategias reivindicatorias y lo más importante su incidencia en la transformación y el mejoramiento del conjunto.



En el conjunto San Alberto, la mayoría de las veces los movimientos reivindicativos son generados por organizaciones vecinales y asociaciones civiles, constituidas previamente al proceso de relocalización. Sus trayectorias organizativas, emergen en un contexto en que los primeros grupos de vecinos organizados, que demandaban atención de programas gubernamentales, fueron forzados por parte de la EBY a asumir un estatuto legal que los habilitara como *asociaciones civiles* y así, responsables jurídicos de cara a la burocracia del Estado. En sus orígenes, las asociaciones civiles se nuclearon en torno a la categoría de afectados. Condición inicialmente impuesta por la EBY, pero que con el paso de los años fue incorporando nuevos significados. La nominación de *afectados* permitió construirse como sujetos políticos habilitados para ingresar en la arena de la demanda (Arach, 2002).

Inicialmente los grupos de “afectados” fueron organizándose en asociaciones de acuerdo con las ocupaciones informales que desarrollaban en relación con el río: pescadores, oleros, lavanderas, cesperos, etc., que vieron desaparecer sus fuentes de trabajo con la suba del nivel de las aguas (Jaume, Álvarez y Frías, 2010). En muchos casos, no todos los integrantes de una asociación provienen de un mismo barrio u oficio, pero seguramente sus dirigentes o líderes llevan consigo su experiencia previa al re-aseguramiento donde la EBY les ha otorgado su nueva vivienda.

Paralelamente a las asociaciones civiles de San Alberto, también han emergido las organizaciones vecinales. Los embrionarios intentos de construcción de las primeras comisiones vecinales dieron origen al surgimiento de conflictos entre los vecinos. La percepción vecinal sobre algunos residentes como potenciales punteros barriales, y/o con afán de liderazgo, derivaron en focos de disputas y fragmentación de las organizaciones. No obstante, *la forma organizativa de las asociaciones civiles* pareció ser más efectiva, en cuanto adhesión comunitaria, ya que muchos vecinos cuestionaron la eficiencia de algunas comisiones vecinales para resolver los problemas del barrio.

Cada asociación se ha constituido en torno a un estatuto que reglamenta su funcionamiento y legitimidad. Sus integrantes se incorporan en términos de asociados, quedando habilitados para participar de periódicas asambleas en



las que se define una dinámica de trabajo y esquema de responsabilidades. Cada asociación regularmente elige a sus autoridades mediante votación en asamblea.

Muchas de las asociaciones civiles, al contar con proyección en el tiempo y con personería jurídica se hallan habilitadas para ser escuchados, gestionar algún tipo de recurso o reclamar ayuda ante otras instancias públicas. Como señala Vicherat y Serrano (2000), este instrumento legal opera no solo como un trámite para lograr determinados accesos, sino que se transforma en un asunto de identidad, pertenencia y presentación del grupo frente a los otros, especialmente las agencias públicas. En el caso San Alberto, las asociaciones civiles constituidas, demandan recursos de subsistencia y subsidios para emprendimientos socio-comunitarios, además de bienes y servicios de consumo colectivo para el barrio.

En la práctica, las asociaciones civiles se nuclean como grupos de presión apelando principalmente al enfrentamiento y el conflicto como mecanismo de demanda y negociación frente al Estado (EBY). En este sentido, el reconocimiento legal y jurídico otorgado a las asociaciones civiles paradójicamente, parece haber jugado un efecto contrario a la Entidad, ya que el estatuto y el actuar en legítima capacidad de representar a los relocalizados, permite reconocer a sus dirigentes y también legitimar sus roles en el juego político de la demanda.

Como marco más general el actuar de las organizaciones vecinales y asociaciones civiles, a pesar de su formalidad, se inscriben en la lógica de los movimientos sociales urbanos. Una dimensión emergente en la explicación de los movimientos sociales urbanos, refiere a la solidaridad organizada en ausencia de políticas públicas (Castells, 1988)<sup>1</sup>. En este sentido, siguiendo a Touraine (1987) un movimiento social, es una acción colectiva orientada a la implementación de valores culturales centrales contra los intereses e influencias de un enemigo definido en términos de relaciones de poder.

El hecho de que las demandas y presiones de los movimientos reivindicatorios urbanos, se dirijan principalmente al Estado, sugiere una creciente importancia de los organismos públicos como proveedores directos o

indirectos de bienes y/o servicios de consumo colectivo (Somarriba, Gezica y Rezende, 1984:21). Estos bienes de consumo colectivo corresponden a la mayoría de los servicios urbanos, como la salud, la educación, el trabajo, los espacios públicos, el transporte, el ambiente y en general todos aquellos componentes que posibilitan la integración social y el desarrollo de estilos de vida colectivos anclados territorialmente.

De cierto modo, en San Alberto el componente social de las políticas de relocalización y los bienes de consumo colectivo se hicieron esperar, y en detrimento de ello se priorizaron programas y acciones de acompañamiento social de corto alcance a hogares que atravesaban por procesos de vulnerabilidad incrementada. Esta situación fue interpretada negativamente por viejos líderes barriales que criticaron las acciones de la Entidad, considerándola insuficientes para atender las necesidades de la población. La entrada en la escena local de estos actores, se debe en gran medida a que eran portadores de experiencias organizativas anteriores a la relocalización.

Hay que remarcar que como consecuencia de la relocalización y la adjudicación de viviendas en diferentes lugares del conjunto habitacional, muchas organizaciones (formadas antes del traslado) se desestructuraron y fragmentaron, no obstante con el correr del tiempo comenzaron a articularse en el nuevo medio. El compartir el mismo barrio, las mismas carencias y, la necesidad de organizar el nuevo hábitat, fue incidiendo en la generación de mecanismos organizativos. Así, vecinos que se conocían previamente de otros barrios junto a aquellos no conocidos hasta ese momento, comenzaron a interactuar, estableciendo una trama de relaciones que se ancló en el nuevo asentamiento.

La organización de actividades festivas, los torneos de fútbol, la construcción de canchas y espacios recreativos encarados por los vecinos, fueron actividades que inicialmente no solo contribuyeron al conocimiento entre vecinos, sino que motivó la participación y organización, *reconstruyendo y complejizando la sociabilidad barrial*, fortaleciendo nuevas identidades. Así el barrio ofició de escenario para el desarrollo de intensas y diversas redes de

comunicación que facilitaron el intercambio social, la construcción de homogeneidades y prácticas sociales.

En otras palabras, el conjunto de estas nuevas experiencias de constreñimiento y agencia, sentó bases para renovados modos de actuar, procesos de solidaridad y organización barrial. Procesos también muchas veces contruidos de cara a la demanda reivindicativa. Marco en el que además, la acción combinada de protesta y movilización para el mejoramiento del barrio, tuvo como protagonista a organizaciones vecinales y asociaciones civiles con fuerte presencia de dirigentes o activistas en el barrio.

### **Movilización y protesta. Algunas experiencias reivindicativas.**

Describir etnográficamente una serie de experiencias organizativas/reivindicativas nos posibilitará otro acercamiento a nuestro problema bajo estudio. Analizar estos procesos implica, además, examinar diferentes eventos relacionados con los procesos organizativos, deliberativos y/o conflictivos que se expresan como “dramas sociales” (Turner, 1982).

En el conjunto San Alberto, las primeras experiencias organizativas de reivindicación datan del año 1999, cuando las primeras asociaciones civiles del barrio protestaron por la mala calidad del barrio y demandaron a la EBY por la provisión de recursos de subsistencia por desarraigo. En ese entonces, los miembros de las diferentes asociaciones civiles del barrio realizaron una asamblea, en la que se elaboró una nota para ser enviada a la EBY. El pedido básicamente consistía en fuentes de trabajo, la instalación de comedores comunitarios y bolsas de alimentos para familias con niños. La nota enviada al área social de la EBY fundamentaba el pedido en “*la condición de afectados, la pobreza y el desarraigo*”.

Un vecino miembro de una asociación, recuerda que la demanda en ese entonces (años 1999-2000) era la más básica: la alimentación. Aunque en el fondo entre los residentes se tenía la clara conciencia que el problema mayor era la pobreza. “*estando acá nos dimos cuenta que nos trajeron acá*”

*engatusados por las viviendas nuevas, pero ya acá nos dimos cuenta que no había comedores y fuente de trabajo y como la EBY no hacia nada nos tuvimos que empezar a juntar los vecinos a movernos de a poco” (Entrevista vecino).*

En aquel momento surgió una experiencia inédita de reunión vecinal con el propósito de debatir una propuesta realizada por un vecino para la instalación de un comedor comunitario en el barrio. Aquella reunión fue muy concurrida, el relato de una vecina señala que además de la inquietud vecinal, había gente hasta en la vereda de la vivienda. En esa reunión se habló de la necesidad urgente de un espacio/sede para un comedor y de la alternativa de ocupar el ex obrador, (que funcionó como depósito de materiales) un gran galpón/tinglado de chapa en ese momento desocupado. La reunión finalizó con el acuerdo generalizado de los vecinos: la elaboración de un petitorio con la firma de todos los vecinos del barrio.

Los primeros pobladores padecieron de manera excepcional los problemas de un barrio donde solo había viviendas. Los procesos organizativos eran incipientes y apuntaban a la obtención de recursos de subsistencia. *“Nuestra situación era desesperante, aparte no nos conocíamos casi entre nosotros y había una sola asociación... lo que más se pedía era trabajo”* (Notas de campo).

Ante la acentuada pobreza y la falta de trabajo, la contratación de mano de obra vecinal (local) en la construcción de nuevas viviendas y el arreglo del barrio (por parte de la EBY) contuvieron de alguna manera el malestar y los reclamos de algunos vecinos del barrio. En su momento, esa experiencia fue exitosa y reconocida por los vecinos. No obstante, a partir de la continuidad del proceso relocalizadorio y la llegada de nuevas familias, muchos problemas volvieron a reflotar; como la falta de vacantes en la escuela.

Durante los primeros tiempos, la activación de los procesos organizativos fueron más bien intermitentes y de acuerdo a necesidades puntuales de la población ya reasentada. Hacia el año 2001, la mala calidad de los servicios de consumo colectivo se hacía sentir: falta de alumbrado público, malos transportes, calles fangosas, falta de espacios verdes, etc. En ese año, los monitoreos y diagnósticos técnicos efectuados por la EBY, advertían: los

problemas que agobian a las familias hacen que a veces, *expresen su malestar bajo formas activas de protesta*<sup>2</sup>. Esas formas de protesta, incluían reclamos a través de la elaboración de petitorios, la recolección de firmas y la actuación más confrontativa de las asociaciones y organizaciones barriales: la movilización vecinal.

En sus inicios, no existió una forma homogénea de movilización vecinal, puede decirse que los movimientos reivindicativos tuvieron diferentes características y alcances. Algunas veces convocados de forma espontáneas, en donde el resentimiento e indignación de individuos o familias comenzaron a transformarse en acción colectiva: juntas vecinales, asambleas, etc. Otras veces fueron surgiendo como planteamientos más planificados y organizados (deliberados y armados) entre los miembros de alguna asociación que impulsó sus reclamos, los hizo públicos y, en el proceso se fueron incorporando otros vecinos.

La forma que se gesta un movimiento reivindicativo más espontáneo puede ser ilustrada mediante la reseña de un evento dramático generado hacia mayo de 2003 cuando la empresa de agua potable repartió intimaciones a morosos con boletas sujeta a corte. Muchos vecinos del barrio se vieron afectados por lo que llamaron “*el boletazo*”; refiriendo a los exorbitantes montos a pagar. De manera casi simultánea a la entrega de las boletas los vecinos más próximos comenzaron a hablar e intercambiar las boletas, señalando la imposibilidad de pagarlas y preguntándose qué harían para evitar el corte. Al día siguiente un vecino decidió tomar la iniciativa de convocar a otros en una esquina del barrio para hacer una asamblea y debatir el tema. Para ello envió a sus hijos a que invitaran a los vecinos de la cuadra. Sin embargo, esa tarde (como lo expresa un informante) eran “*cuatro gatos locos*”. Había fallado el mecanismo de convocatoria.

Días más tarde, la convocatoria es realizada nuevamente por un vecino encargado de un salón de uso múltiple (SUM), que a partir del “*boca a boca*” fue invitando a los vecinos, miembros de asociaciones y encargados de otros SUM a una reunión para debatir el problema del inminente corte de agua a muchos residentes. Allí se dieron los primeros pasos para la organización. La

reunión tuvo el carácter de asamblea y fue muy concurrida, hablaron no solo los referentes, sino otros vecinos muy preocupados por su situación. Las propuestas fueron diversas y se registraron en un acta.

A pesar de la espontaneidad, la auto-organización vecinal fue impecable. La reunión funcionó con carácter de asamblea, se eligió moderador, secretarios de actas y hasta se implementó un mecanismo de votación para la toma de decisiones. Dos resoluciones básicas resultaron de aquella asamblea; por un lado el rechazo al corte con pedido de un plan de pagos y por otro, solicitar la intervención del gobierno provincial mediante un subsidio de agua para un consumo mínimo<sup>3</sup>. La EBY se declaró incompetente en el tema, no obstante la empresa prestadora de agua realizó algunas concesiones.

Puede decirse que estas experiencias de algún modo sembraron saberes y prácticas, ya que frente a otros problemas de orden colectivo, los vecinos presentaron cierta predisposición a actuar de determinada manera, creando rutinas de gestión: asambleas, actas, votación, firmas, etc.

Las acciones reivindicativas tienen diferentes protagonistas, desde vecinos que se declaran *independientes*, hasta representantes de asociaciones civiles, miembros de clubes, y en algunos casos personas ligadas a iglesias. En este sentido, ¿cómo y desde dónde emerge una acción? y ¿cuáles son los actores que se involucran?, son cuestiones complejas, que responden a innumerables causas. Entre ellas el sentido de pertenencia a un barrio con dificultades para la vida cotidiana, es a veces convergente para la acción vecinal, más allá del auspicio de algún grupo o asociación. Aunque hay que señalar que las asociaciones civiles son las que tienen mayor poder de convocatoria, apoyo y negociación.

Con el correr del tiempo, el proceso de relocalización fue avanzando, por lo que el conjunto habitacional incrementó abruptamente su población y, conforme con ello resurgieron otros problemas referidos a la dimensión del hábitat y la insuficiencia de los componentes sociales de los programas de relocalización. Los vecinos necesitaban más escuelas, atención sanitaria, y comedores comunitarios. De manera simultánea a estos problemas



comenzaban también a emerger con más énfasis las asociaciones civiles como un modelo de agrupación colectiva.

En este contexto, es de particular importancia el accionar de las asociaciones civiles, su lógica de acción colectiva es coyuntural. En algunos casos clientelar o funcional a políticas de la EBY (cuando hay subsidios o concesiones) en otros momentos su actuar reviste las características de grupos de presión para la obtención del algún reclamo. Como claramente lo detalla un entrevistado: *“hay momentos en que está todo bien con la EBY, cuando nos dan cosas pero momentos en que está todo mal... la situación es sencilla, o nos dan o hacemos esto o aquello”*. (Notas de campo).

Cualquier pedido o reclamo que manifiesta una asociación es realizada por medio de una nota formalmente escrita, firmada y enviada a la EBY. Aunque siempre está latente el procedimiento informal: la movilización; incluso puede decirse que esta acción es interpretada por los vecinos como la más efectiva a la hora de ser escuchados. La puesta dramática y escenográfica, como el hecho de llamar a un comité de emergencia para solucionar un problema y/o declararse en reunión permanente, convocar a la prensa, es parte de una estrategia de exteriorizar el reclamo y la protesta.

Un entrevistado manifiesta conocer muy a fondo el procedimiento del reclamo: *“lo que pasa es que acá ya tenemos bien claro como viene la mano, por eso mandamos notas y preventivamente también salimos a la calle”*. Convocar gente para una protesta o reclamo es en palabras de otro vecino *“una forma de empujar a la nota”*.

Cada asociación tiene un número de vecinos del barrio, ligados a la organización en términos de asociado. Los miembros que se involucran participando lo hacen a partir de incentivos particulares, como ser la obtención de algún beneficio (recibir bolsas de alimentos, trabajo, u otro tipo de ayuda). En el fondo puede decirse que hay una implícita relación contractual y moral: *los que participan de las actividades de la asociación tendrán prioridad*. (Nota de campo).

En este sentido, la participación tiene códigos, implica como *deber* por un lado, involucrarse en procesos deliberativos de la asociación (discutir y



mostrar presencia, votar, firmar notas, etc.) y por otro, la obligación de asistir a cuantas manifestaciones o movimientos sea convocado. En ese proceso el mostrar apoyo para “*conseguir algo*” es la base del compromiso con la asociación. En algunos casos llevar pancartas, acampar, hacer un escrache es mostrarse y mostrar lealtades, compromisos.

Hacia el año 2004, la ocupación del conjunto habitacional se completó en su totalidad con la llegada de los últimos contingentes de población relocalizada. En ese momento, si bien el conjunto estuvo dotado parcialmente de servicios e infraestructura comunitaria, no obstante, la habilitación de nuevas viviendas aumentó la presión de la demanda hacia los ya sobresaturados servicios sanitarios y educativos. Las demandas y reivindicaciones de la población local requirieron de la atención de diversas instituciones y dependencias estatales. Así las organizaciones de vecinos y asociaciones civiles dirigieron sus reclamos hacia los ministerios de Salud Pública, de Educación, de Bienestar Social, y, además la Municipalidad de Posadas. Sin embargo en el epicentro de todos los reclamos, los vecinos de común acuerdo situaban a la EBY como el principal responsable en la gestión de soluciones.

Ante el descontento vecinal generalizado y el duro cuestionamiento de algunas organizaciones, la EBY habilitó de manera excepcional una escuela provisoria, para resolver una grave deficiencia en el ámbito educativo. Del mismo modo se fueron resolviendo otros problemas, entre ellos la provisión de Salones de Usos Múltiples (comedores), además de arreglos en los desagües que en días de lluvias anegaban muchas manzanas del barrio.

En general, durante el proceso de constitución del barrio y la provisión de los servicios, la intensidad de la participación vecinal variaba según la urgencia de las necesidades colectivas y tendía a disminuir en la medida que se encontraban soluciones a algunos problemas del barrio. De este modo, la dinámica de participación tuvo el inconveniente de no ser sostenida en el tiempo, sino activada coyunturalmente para objetivos puntuales. No obstante, la experiencia de la protesta dejó instalada una serie de saberes y prácticas a

las que eventualmente se podría recurrir en caso de que fuese necesario solucionar otros problemas.

Al margen de la naturaleza de los problemas colectivos y su relativa visibilidad o no como tal por parte de los relocalizados, quizás el hecho más significativo es que el accionar de algunos vecinos deja incipientes prácticas y saberes, que de algún modo se van rutinizando desde el nuevo lugar de vida. El idearse una solución, el saber con cuál vecino hablar, a quién pedir apoyo, hacia quién y cómo dirigirse (el pedir ayuda para redactar una nota o hablar con vecinos de influencia) constituyen enseñanzas del actuar colectivo. En otras palabras la gente evalúa posibilidades y limitaciones, atraviesan por situaciones, analizan alternativas y proponen *maneras* de solucionarlas.

Es necesario señalar además, que las acciones reivindicativas se nutren de un repertorio de acciones estratégicas ideadas para hacer frente a diferentes situaciones. Acciones que se visibilizan (despliegan) tanto en el espacio público como acciones que se traman en el ámbito privado. El *pedir y esperar a ver que pasa*, es parte de un juego de especulaciones con el que muchas veces se inicia la negociación. Desde la sutileza de una nota/petitorio, hasta el juntar gente en un espacio público como prueba de fuerza, el ir subiendo de tono las conversaciones, increpar, acusar, construir víctimas y victimarios, movilizar gente, amenazar, etc., es parte del despliegue de la lucha reivindicativa. Puede decirse que en conjunto estas prácticas constituyen *repertorios de la acción colectiva* (Tilly, 1985).

En su constitución la acción colectiva incorpora un proceso amalgamado de actores sociales, intereses, relaciones de poder, estrategias, etc. Con frecuencia, la acción reivindicativa de las organizaciones es desarrollada a partir de una serie concatenada de prácticas que son implementadas en base a etapas, de modo que al fallar una acción programada, la organización recurre a un *Plan B*. En otras palabras, en caso de obtener una respuesta negativa o si las gestiones terminan con resultados insatisfactorios, la organización apela a la acción directa: la movilización.

En esta instancia es particularmente llamativa la coalición de organizaciones y asociaciones de todo tipo, no necesariamente ligadas al

barrio. La estrategia resulta variada desde acampes frente a la EBY, hasta cortar la ruta, realizar escraches, marchas, en suma generar un hecho con repercusión mediática; ello a juicio de sus participantes provoca o, desencadena *una respuesta*.

Los innumerables problemas y las soluciones brindadas por la Entidad, hasta ese entonces no dejaban de ser parciales y de corto plazo. Además comenzaba a tomar forma otro grave problema: el progresivo deterioro de las viviendas que se entregaron en las primeras etapas de construcción del barrio.

Un notable problema que padeció un sector de hogares de San Alberto, ha sido la deficiencia constructiva y el deterioro de las viviendas construidas<sup>4</sup>. En ese marco comenzaron a surgir variadas visiones, interpretaciones y discursos: *“las viviendas no sirven para nada, son chiquitas, están mal hechas, estamos peores que antes”... “la EBY tiene que hacerse cargo y arreglar este desastre, acá no se puede vivir”, “somos personas no chanchos estamos todos apretados”* (Notas de campo).

El descontento generalizado de los 411 hogares que habitaban estas viviendas provino de su comparación con las viviendas entregadas en etapas posteriores, ya que estas poseían mejores terminaciones, además de ser más amplias y presentar mejor calidad. Si bien este conflicto fue desatado por los residentes más antiguos, no obstante, con posterioridad otros vecinos se solidarizaron, sumando algunos reclamos específicos: alumbrado público, mejoramiento de andenes, seguridad, etc.

Como muchos vecinos, ya habían hecho arreglos en sus viviendas por sus propios medios, el criterio unificado apuntaba a solicitar un subsidio en dinero como resarcimiento o para el arreglo de las viviendas. Durante meses la EBY desoyó los reclamos y deslindo responsabilidades.

El arrastre de este malestar despertó una ola de sucesivas e incrementadas protestas vecinales. En este conflicto, el accionar de las asociaciones civiles fue solamente de apoyo a vecinos organizados; quienes en su lucha han realizado piquetes, escraches, barricadas y campamentos frente al edificio de la Entidad, en el centro de Posadas y otros puntos de la ciudad.

Desde el relatorio oficial de los hechos, algunos funcionarios de la Entidad manifestaban a los medios, que el reiterado actuar de los vecinos y organizaciones del barrio, su estrategia de lucha y reivindicación obedecían a intereses políticos. Además toda acción reivindicativa fue interpretada en términos vandálicos, adjudicando a los integrantes de las manifestaciones una actitud de *apriete y presión*. Los dirigentes y representantes de las organizaciones en tanto defendían sus procedimientos argumentaban que sus acciones *en última instancia* convocaban al diálogo y algún tipo de acuerdo, ya que de ese modo tenían la única posibilidad de ser escuchados.

El plan de lucha continuó a partir de un acampe frente al edificio de la Entidad, en el centro de Posadas. En ese marco los manifestantes realizaron escraches, olla popular, quema de gomas, y pintadas en pancartas, visibilizando sus reclamos, que entre variadas cuestiones, las centrales apuntaban a mejoras en las viviendas que les fueron entregadas a medio terminar o, la liquidación a cada familia damnificada de la suma de 12 mil pesos.

Luego de 11 días de acampe con presencia permanente en el lugar y corte de calle con quema de neumáticos, la Policía intentó desalojar las carpas que permanecían en media calzada frente al edificio de la EBY. La tensión mayor se produjo durante horas del mediodía, cuando en un segundo intento, entre los efectivos de la Policía y los Bomberos, intentaron desalojar el acampe de la vía pública y evitar la quema de gomas.

El fallido intento de la Policía provocó mayor enojo entre los manifestantes y de manera inmediata se organizó una marcha con antorchas por las calles de la ciudad. En San Alberto unos 200 vecinos se autoconvocaron para asistir a la marcha ese mismo día al atardecer. Como parte de la marcha, los organizadores invitaron al diácono del Obispado de Posadas, a una celebración y bendición en la vereda frente a la sede de la EBY.

A últimas horas de la tarde, ya anocheciendo y antes de iniciarse la movilización, el diácono en medio de los inquietos manifestantes pidió la protección de Dios para todos los presentes que luchan por sus distintas

pretensiones. Luego de unos 20 minutos se inició la marcha que se detuvo frente a Casa de Gobierno durante otros diez minutos. Durante gran parte del trayecto muchos manifestantes cantaban y hacían oír sus gritos *"el pueblo unido jamás será vencido"* y el de *"la EBY corrupta"*, los manifestantes apelaban al llamado de atención de los transeúntes empuñando banderas argentinas y decenas de velas insertas en botellas de plástico cortadas al medio<sup>5</sup>.

La judicialización del problema y el persistente actuar de las movilizaciones vecinales obligó a que la EBY realizara una reunión extraordinaria en Asunción Paraguay el 14 de junio de 2007. En esa reunión, el Consejo de Administración, (luego de una asesoría jurídica y del análisis de los expediente) resolvió aprobar una partida presupuestaria para el arreglo de las 411 viviendas de la Primera Etapa del conjunto<sup>6</sup>.

Meses más tarde otra protesta de gran repercusión en Posadas, fue protagonizada por la Asociación Civil Oleros Unidos. A la entrega de un extenso petitorio en reclamo de elementos de trabajos, le siguieron varias jornadas de protestas y corte de ruta. Al reclamo se sumaron otras 9 asociaciones que firmaron la solicitud.

A pesar de presentar errores de ortografía, el petitorio detallaba un extenso listado, desde camiones volcadores, materiales de construcción, equipamiento de oficina, hasta un largo detalle de artículos de cocina y alimentos para comedores comunitarios. La nota fue dirigida al director ejecutivo de la EBY y los responsables de las áreas social y jurídica. Desde la EBY, se calificó de ambicioso los pedidos de las asociaciones.

Ante el potencial empeoramiento de los cortes de ruta, las autoridades de la EBY convocaron a una "Mesa de Dialogo y Concertación" de carácter permanente, con el respaldo de las asociaciones. De la reunión participaron funcionarios de la Entidad y líderes de asociaciones. Durante el encuentro se analizaron los diferentes pedidos realizados inicialmente y luego se acordó un orden de prioridades para las demandas, que apuntó básicamente a la asistencia alimentaria.

Aquel acuerdo alcanzado no apaciguó el conflicto, sino que de alguna manera lo incrementó, ya que días más tarde un sector importante de vecinos comenzó a cuestionar el acuerdo, sosteniendo desconocer lo negociado entre la EBY y las asociaciones, y cuestionando su representación. Entre los rumores de descontento se sostenía que los representantes de las asociaciones no consultaron sobre la participación de los vecinos en la mesa de diálogo, ni informaron los acuerdos alcanzados.

De manera específica la población de San Alberto comenzó a convulsionarse frente a la incertidumbre de lo acordado. Algunos líderes de asociaciones del barrio (asociaciones chicas) que no participaron del diálogo con la EBY, comenzaron a protestar y caldear el conflicto. El rumor que circulaba era de “negociados” a puertas cerradas en mesa chica.

En el marco de este panorama, comenzó a gestarse otra protesta reivindicativa, desarrollada en primera instancia, por un grupo de vecinos, quienes desde una vieja camioneta provista de altoparlantes, decidieron convocar a los residentes a participar de un corte de ruta, en repudio a las asociaciones que negociaron aparte y también en reclamo de mejor asistencia alimentaria, fuentes de trabajo, y mejoramiento del barrio. Ese día, desde los altoparlantes, además se difundía la negativa respuesta de la EBY a viejas demandas vecinales. Sus organizadores explicaban la modalidad de la protesta.

Nuevamente, la ruta 12, en inmediaciones al conjunto fue el lugar escogido para el corte; los vecinos no tardaron en llegar al lugar. Una vez realizado el piquete y encendido los primeros neumáticos, la columna de humo atrajo a la prensa. Miembros de asociaciones civiles, haciendo uso de pancartas exhibían sus demandas. Hacia horas del mediodía la presencia policial liberó la ruta, la retirada de los vecinos ese día fue pacífica. No obstante, en los días siguientes el corte volvió a realizarse con mayor organización, se sumaron vecinos de diferentes sectores del barrio y asociaciones civiles pertenecientes a otros barrios de relocalizados y, con ellos se sumaron más demandas: reparación de viviendas deterioradas, subsidios

para emprendimientos socio-productivos, entrega de herramientas para el trabajo comunitario, asistencia sanitaria etc.

Durante esa semana y las siguientes, a pesar de que los cortes fueron intermitentes, la EBY para apaciguar el conflicto, finalmente convocó a los vecinos participantes de los cortes como también a representantes de distintas organizaciones y asociaciones civiles a una reunión, en la que se firmó un “acta acuerdo”. En ese marco, los funcionarios del área social de la EBY se comprometieron a gestionar los recursos solicitados.

En marzo de 2009, los conflictos con la EBY volvieron a suscitarse: el reclamo en esta ocasión sería la falta de muros perimetrales en todo el conjunto habitacional. Los vecinos argumentaban variados problemas desde falta de privacidad, hasta escurrimiento de agua y anegamientos durante los días de lluvia. La nota enviada solicitada, además la reposición de recursos para comedores y merenderos del barrio. En la plaza central de San Alberto se deliberó las acciones de protestas que culminó una vez más, con la posibilidad del acampe frente al edificio de la EBY. El reclamo generó un complejo proceso de negociación.

Al día siguiente los manifestantes se trasladaron frente al edificio de la Entidad, realizaron escraches, quema de goma y piquetes. Oficialmente desde la EBY varios funcionarios sostuvieron que son “*desmesurados e irrazonables*” los reclamos de los manifestantes. Al tiempo que el director ejecutivo de la EBY, formalizó una denuncia ante el Tribunal de Faltas de Posadas argumentando que las manifestaciones “*están afectando la vía pública, la paz social y la calidad de vida de las personas*”. Además puntualizó que el conflicto en realidad se trata de “*una caja política*” y “*una vinculación directa entre el adelantamiento de las elecciones y la reparación de estas protestas*”.

Afuera del edificio de la Entidad, los manifestantes pintaban un cuadro caótico, quema de gomas, tamboreo y pintadas sobre la nueva fachada del edificio de la EBY. El panorama era desolador, la columna de humo era visible desde distintos puntos del centro de la ciudad.

La manifestación duró, con intermitencia más de 7 meses, en ese lapso, el proceso organizativo mostró diferentes facetas, desde gestionar el reclamo a



través de diferentes coordinadores según sector del conjunto, organizar campañas de recolección de alimentos para sostener el permanente acampe en el centro de Posadas, hasta cortar rutas y recurrir a la justicia esperando algún fallo a favor.

De manera más general, el conjunto de situaciones aquí descritas, evidencian distintos alcances de agencia y estrategias de incidencia en el devenir de un barrio atravesado por carencias. La provisión de servicios e infraestructura comunitaria, así como de recursos de subsistencias, el mejoramiento de las viviendas y la formulación de una agenda para el barrio, son resultado de la acción colectiva, de la contienda y el enfrentamiento con el ente relocalizador.

En este sentido, la contienda desatada a partir del haz de negociaciones que desencadena una protesta y los resultados alcanzados a través de este tipo de acción colectiva, sugiere repensar la noción de poder. El poder en tanto un componente relacional, no se halla monopolizado o centralizado en el ámbito estatal (EBY), por lo tanto su naturaleza es más dinámica, inestable y situacional (Foucault, 1999). Como señala Hannah Arendt (1993:39) “el poder surge entre los hombres cuando actúan juntos y desaparece en el momento en que se dispersan” (...) “así sólo donde los hombres viven tan unidos que las potencialidades de la acción están siempre presentes, el poder puede permanecer en ellos” (1993:40).

A lo largo del devenir de un conjunto, construido por etapas, los movimientos reivindicativos gestados transcurrieron de manera más discontinua, con ciertos resultados inestables, por ello resulta difícil concebir el desarrollo ordenado y secuencial del conjunto de acciones y logros obtenidos a partir de la acción colectiva vecinal.

### **Mesas interactorales y de gestión asociada**

A mediados del año 2004 una cantidad creciente de problemas relacionados a los déficits de servicios e infraestructura y problemas referidos al hábitat en general, a diario despertaban cierto descontento generalizado entre vecinos de

diversos sectores del barrio. En ese contexto la EBY impulsó de manera innovadora la apertura de espacios de participación vecinal para el tratamiento de los problemas del barrio; espacios a los que denominó “*mesa interactoral barrial*”.

A pesar de ser un programa de participación oficial impulsado por el área social de la Entidad, la mesa fue progresivamente desarrollada a partir del protagonismo vecinal. Aunque en los primeros tiempos la falta de participación fue notable en estos escenarios y los reclamos directos parecieron ser las prácticas más recurrentes de los vecinos en un caótico barrio sobredimensionado de problemas.

En términos formales, este escenario de participación interactoral fue concebido bajo un modelo de gestión asociada, en tanto una forma específica de planificación y gestión llevadas a cabo de manera compartida y como resultado de mutuos acuerdos, negociaciones y consensos entre ciudadanos, autoridades y organizaciones sociales, lo que reconfigura un nuevo modelo de interacción gobierno/sociedad. Ello supone que el sector gubernamental no siempre detenta mayor poder de decisión frente a actores sociales, quienes por otro lado, no necesariamente ocupan una posición pasivamente receptora y subordinada.

Mas allá de los eufemismos de moda; la idea de gestión asociada originalmente apunta a abandonar el modelo tradicional y vertical de relación Estado/Sociedad y sustituirlo por modelos asociativos de carácter horizontal que involucren las prácticas intersectoriales de los múltiples actores y, en donde la integración de las propuestas de gestión sea construida por acuerdos y consensos a fin articular proyectos comunes (Poggiese, Redín y Alí, 1999).

En San Alberto, inicialmente la apertura de estas mesas de participación fue propuesta por técnicos de la EBY, aprovechando la ya instalada oficina barrial con personal a cargo para motivar el involucramiento vecinal en la solución de los problemas. La consigna fue que las instituciones se involucren en los emprendimientos vecinales, y a la vez que, los vecinos participen en las actividades de decisión y gestión gubernamental a fin de resolver problemas de interés colectivo.

La idea inicial fue que los múltiples problemas del barrio podían encontrar un tratamiento y resolución a partir de estos espacios públicos de participación y, en la que el acuerdo y la planificación conjunta, entre otras cosas posibilitaba paliar los niveles de conflicto y protestas muy frecuentes entre la población relocalizada. En este sentido, desde un principio, la mesa interactoral apuntó a trabajar la complejidad y la conflictividad que muchas veces caracterizó la demanda de la población local y su relación con las instituciones estatales que trabajan en el barrio.

El presupuesto es que, a diferencia de los viejos modelos de gestión burocráticos/tecnocráticos orientados a los beneficiarios con solución circunstancial, la gestión asociada al ser construida por acuerdo de actores implicados, obtiene como resultado un proyecto más viable y sostenible en el tiempo, lo que implica evadir los estrechos límites del “asistido” como receptorista pasivo de las acciones estatales.

Bajo estas ideas, en las mesas, los técnicos se han esforzado en estimular la participación vecinal, creando o ampliando la socialización de los residentes en torno a las actividades de gestión por mejores servicios, promoviendo además el compromiso de los vecinos en el mejoramiento de las instalaciones del barrio. En este sentido, se habló reiteradamente de la importancia de “la participación, el compromiso, el consenso, la unidad”, etc.

En cuanto escenario, la mesa reunió a actores sociales y gubernamentales, de modo que vecinos y miembros de organismos oficiales (EBY, Ministerios de Salud y Educación, autoridades de otras dependencias, etc.) comenzaron de manera inédita las primeras experiencias de gestión conjunta. En el proceso de constitución de la mesa interactoral, el equipo técnico de la EBY ha tenido un marcado protagonismo en cuanto a actividades de convocatoria y promoción entre vecinos y otros actores.

El objetivo explícito de la mesa fue *“promover un espacio de articulación inter-actoral participativo y democrático para la resolución de los problemas comunitarios”*. Los actores participantes de las mesas fueron vecinos del barrio, líderes comunitarios, docentes de escuelas y guarderías, promotores de salud, miembros de asociaciones civiles, responsables de comedores, miembros de

iglesias locales, personal policial de la comisaría del barrio, técnicos de la EBY, y de otras instituciones que trabajan en el medio.

Los primeros intentos de conformación contaron con poca participación de vecinos y actores institucionales, lo que derivó en fortalecer actividades de convocatoria y promoción del espacio a fin de involucrar a más actores. Meses posteriores, significativos logros obtenidos a través de las mesas, como mejoramiento de las instalaciones de la escuela, el arreglo del alumbrado público y la provisión regular de agua potable hicieron que vecinos del resto del conjunto se motivaran y comenzaran a participar de las mesas. *“Primero la gente no conocía la mesa, hubo desinterés, indiferencia, por eso costó arrancar; pero después salieron cosas importantes para mejorar el barrio y de ahí la gente se empezó a interesar más y a venir”* (Entrevista, vecino).

Una vez constituida, como espacio público local del barrio, la mesa interactoral ofició como escenario portador de una doble funcionalidad, por un lado como un ámbito de socialización entre vecinos y miembros de instituciones que trabajan en el barrio, y por el otro como un espacio en el que los vecinos plantean diversos problemas colectivos y discuten variadas estrategias de solución. En otras palabras estos espacios constituyen un ámbito de interlocución colectivo donde, la presencia de vecinos, técnicos y otros actores institucionales tratan cuestiones de interés relacionadas con la vida cotidiana de los vecinos, en el marco de los márgenes de su territorialidad (Sintes, 2009).

A través de las mesas, los vecinos plantearon problemas, referidos a la falta de transporte urbano, atención socio-comunitaria, el cuidado del medio ambiente, carencia de infraestructura, la deficiencia de servicios públicos etc., así como también se organizaron actividades festivas en el barrio. En líneas generales, a través de estos procesos de gestión asociada, se han alcanzado resolver problemas coyunturales del barrio, que muchas veces a pesar de ser parciales resultó una alternativa válida, abierta al mejoramiento del barrio.

Lo interesante a remarcar, es que la mesa de participación barrial, más allá de ser un espacio formalizado para el encuentro y la concertación es un espacio proclive a conflictos y negociaciones, ajustado así a la naturaleza de

las cuestiones públicas, pero como tal abierto a un nuevo modelo de tomas de decisiones inter-actorales. Además es un espacio en el que se puede vislumbrar el desarrollo de prácticas *reproductivas o transformativas* en cuanto a formas de participación comunitarias.

La *hipótesis* es que, en el escenario asociativo de gestión, los actores participan desde un acervo cultural de saber, pero mediante esa participación no solo se reproducen saberes existentes, sino que se transforman y se crean nuevas prácticas de participación comunitaria sobre la base del diálogo, el intercambio de saberes y el consenso.

A partir de la habilitación de las mesas, el resolver los problemas de interés colectivo del barrio, no fue concebido como competencia única e indefectible del Estado, (EBY) y, por tanto de un saber técnico hegemónico. El habilitar por primera vez a los vecinos a intervenir de manera implicada sobre la realidad que se pretende transformar, es una experiencia inédita que deja márgenes de oportunidades a la construcción de nuevas prácticas.

En primer lugar, a través de las mesas se trató de pasar del reclamo como un simple pedido vecinal dirigido al Estado (de “abajo para arriba”), hacia una propuesta de planificación y gestión compartida, en la que los vecinos de alguna manera antes del delegar, debieron “hacerse cargo” e involucrarse junto a las instituciones en la gestión de la solución de los problemas del barrio. Ello a simple vista constituiría una propuesta de cambio e intervención que rompería con modalidades tradicionales, verticales y a veces “autoritarias” de concebir y, de encarar la solución de problemas de interés público.

En segundo lugar, dejamos de lado “la ficción de que los actores participan en condiciones de igualdad”, puesto que en el escenario de las mesas, actúan actores desigualmente constituidos, en una gran diversidad de “temas de discusión/deliberación”, actores dotados diferencialmente de información, saberes y prácticas (actores débiles y fortalecidos para la toma de decisiones). El debatir para acordar, no implica relaciones armónicas y libres de tensión; los procesos deliberativos son también profundamente conflictivos y dramáticos. Los acuerdos que se alcanzan por arreglos son más o menos inestables, y operan en contextos donde la comunicación está tergiversada por

las desigualdades de poder. Como señala Gusfield (1981:34): “la arena pública no es un simple campo de juego con las mismas reglas para todos; algunos tienen mayor acceso y también un mayor poder para dar definición a los problemas públicos”.

Más allá, de factores que pudieron corromper la participación comunitaria, las experiencias de las mesas interactorales, señala que las mismas han constituido un espacio para el encuentro, el conocimiento y la comunicación entre actores de diferentes vecindarios del barrio. Ello *en cierta medida* ha posibilitado autonomía y determinación en la definición de problemas y modalidades de trabajo.

En este sentido, entrado el año 2008, como hecho significativo, los vecinos plantean descentralizar el lugar de celebración de las mesas, que se venían realizando hasta ese momento en el edificio de la oficina barrial de la EBY. Así, propusieron una modalidad periódicamente rotativa de las mesas por diferentes sectores del conjunto habitacional. El espacio físico de realización serían los SUM y clubes del barrio, el argumento fue dar mayor participación a los vecinos. Situación que puede interpretarse como un proceso de involucramiento y apropiación vecinal del espacio de deliberación constituido.

Es oportuno señalar en este análisis, que el involucramiento y participación de los vecinos en las mesas interactorales del barrio no fue de manera sostenida en el tiempo, y tampoco la mayor parte de los vecinos del barrio han participado de las mismas. Más bien, la participación vecinal estuvo motivada alrededor de ciertos temas de incumbencia colectiva o problemas que a juicio de los vecinos merezcan de una urgente solución, como el caso de la inseguridad, la falta de atención sanitaria o el cuidado del medio ambiente.

En este sentido, con el correr del tiempo, en la medida en que en el barrio se han diversificado los problemas, simultáneamente se fueron habilitando otras mesas para discutir problemáticas puntuales con vecinos y actores institucionales pertinentes. Así, surgieron las mesas de salud, medio ambiente, educación y seguridad. El focalizar los temas de discusión sobre problemáticas específicas posibilitaba a juicio de los participantes involucrarse con motivación y voluntad política. Por otro lado, el escenario de las mesas,

prefiguró un análisis prospectivo, en el que los participantes de alguna manera visualizaron situaciones futuras y posibles soluciones, para dar forma a un nuevo saber-hacer.

Como señala Poggiese (2000:29) “saber-hacer” es un compuesto de saber y de hacer, que se potencia en su continuum. Se conoce de una manera nueva y por eso se actúa de una manera nueva, o viceversa, porque se actúa de una forma nueva, se puede conocer de otro modo. Las redes mixtas socio-gubernamentales (de gestión asociada) se configuran como un sistema que genera un nuevo “saber-hacer”. Este saber compartido, es también conceptualizado a través de la noción de sinergia cognitiva (Boisier, 2004), en tanto proceso que alimenta una interacción social direccionada a resolver problemas.

Esta capacidad interactoral de pensar y hacer desencadena cierta habilidad en cuanto protagonismo para organizar y producir las transformaciones en el espacio colectivo del barrio. En este sentido, a partir de las mesas, los vecinos, en sus condiciones de agentes de cambios, tendrían un margen autonomía y posibilidad de injerencia sobre las decisiones que afectan el devenir de sus lugares de vida.

### **Reflexiones finales. Agencia, acción colectiva y transformación del hábitat**

La cotidianeidad en el nuevo lugar de vida y la proximidad física con anclaje territorial, ha incidido en nuevas formas de sociabilidad, saberes, estilos de vida y también identidad. Así, el morar bajo condiciones de desventajas ha implicado de manera casi reiterada compartir carencias y a su vez organizarse para resolver problemas comunes.

Los relocalizados experimentan las adversidades y sobre esas experiencias muchos hablan de las consecuencias de la relocalización, las interpretan, evalúan y, ello proporciona la base para sus acciones. Así, el sistema social condiciona pero también habilita y legitima el accionar de actores organizados. Los relocalizados tienen capacidad de producir cambios



en el mundo social; existen constreñimientos, pero ello no implica que los actores no tengan elección ni puedan transformar las situaciones. Ello pone en evidencia que detrás de la segregación y la acción colectiva emerge un proceso de estructuración, de encuentro entre la acción social y la estructura.

Al margen de los efectos estructurales de la relocalización y la segregación (pobreza, desempleo, marginalidad, degradación del hábitat etc.), los relocalizados cotidianamente producen sus prácticas. En otras palabras, la estructura social influye sobre los actores, no solo condicionándolos, sino también facilitándolos. Esas situaciones estructurales llevan a que los relocalizados busquen alternativas y prácticas constituyentes de un nuevo lugar de vida, ordenando y transformando el hábitat.

Más allá de las adversidades de un conjunto habitacional de población pobre/relocalizada, el mejoramiento de ese hábitat, ha involucrado la capacidad de agencia colectiva. Experiencias signadas por procesos organizativos, en que los pobladores se organizaron, lucharon y, consiguieron la extensión de algunos servicios básicos: escuelas, agua, salas de primeros auxilios, transporte, etc., evidencian un comportamiento activo orientado al mejoramiento de la calidad de vida.

A pesar del tiempo transcurrido, la población de San Alberto no está inmersa en un mundo estático, determinado por decisiones gubernamentales estrictamente programadas, sino que los vecinos están frente a la posibilidad abierta de intervenir sobre sus lugares de vida a partir de su capacidad activa y colectiva. La compleja y cambiante naturaleza de la emergencia de nuevos problemas, la expansión del barrio, la relocalización de nuevos hogares y con ello, la llegada de nuevos actores, el liderazgo, el poder, las cuestiones organizativas, y otras tantas engendran la posibilidad de modificar/mejorar la calidad del hábitat barrial.

En un contexto periférico, de carencias urbanas, los procesos organizativos y reivindicativos *serían el doble resultado de una población activa que despierta capacidad de agencia colectiva frente a unas condiciones objetivas, creadas por la secuela de programas de relocalización, que habilitó*

nuevos lugares de vida, en espacios no articulados a la trama urbana, donde no hay servicios ni infraestructura básica.

La experiencia del conjunto San Alberto, evidencia que el mejoramiento al menos gradual, de los bienes y servicios de consumo colectivo, estuvo relacionado con la capacidad vecinal para abrir procesos deliberativos, crear espacios participativos y construir estrategias colectivas. El conjunto de estas situaciones, de alguna manera ha sentado bases para procesos organizativos desde los que se gestaron prácticas y luchas reivindicativas que transformaron problemáticas y necesidades de la población en acciones gubernamentales de intervención.

### **Bibliografía**

ARACH, Omar. (2002). "Ambientalismo, desarrollo y transnacionalidad en Paraguay. Consideraciones a partir de las protestas en torno a la represa de Yacyretá". *Cuadernos para el debate* N° 16, Programa de Investigaciones Socioculturales en el Mercosur. Instituto de Desarrollo Económico y Social. Buenos Aires. IDES. 5-46.

ARENDDT, Hannah. (1993). *La Condición Humana*. Barcelona: Piados.

BLAKELY, Edward y SNYDER, Mary. (1997). *Fortress America. gated communities in the United States*. Brookings Institution Press-Lincoln Institute of Land Policy. Washington, DC.

BOISIER, Sergio. (2004). "Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente". *Eure Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales*. vol. 30 número 90. Santiago. pp. 27-40.

CASTELLS, Manuel. (1988). *La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos*. Madrid. Alianza Universitaria.

CASTELLS, Manuel. (1999). *La cuestión urbana*. Madrid: Siglo XXI, decimoquinta edición.

FOUCAULT, Michael. (1999). *Estrategias de poder: Obras esenciales, volumen II*. Barcelona: Paidós.

- GIDDENS, Anthony. (1985). *The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- GUSFIELD Joseph. (1981). *The culture of public problems*. Chicago: University of Chicago Press.
- JAUME Fernando; ÁLVAREZ Néstor y FRÍAS Liliana. (2010) "Ríos libres para un pueblo sano. La relocalización de los vecinos de El Brete". *Revista Cuaderno Urbano*, Vol 9, Nº 9, Corrientes, Argentina. pp. 91-109.
- MARCUSE, Peter. (2004). "Enclaves, sim; guetos, não: a segregação e o estado". Em *Espaço & Debates*, 45, 24-33. Rio de Janeiro. Brasil.
- MELUCCI, Alberto. (1989). *Nomads of the Present. Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society*. London: Century Hutchinson.
- MELUCCI, Alberto. (1999). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: El colegio de México. Centro de Estudios Sociológicos.
- POGGIESE, Héctor; REDÍN Elena y ALÍ Patricia. (1999). El papel de las redes en el desarrollo local como prácticas asociadas entre Estado y Sociedad. En Daniel. Filmus (Comp.). *Los Noventa*, Buenos Aires : Eudeba.
- POGGIESE, Héctor. (2000). Movimientos sociales, formulación de políticas y redes mixtas socio-gubernamentales para un nuevo "saber-hacer" en la gestión de la ciudad. En *Desarrollo urbano: viejo tema o exigencia del presente*. Buenos Aires: Ediciones CLACSO.
- SCRIBANO, Adrián. (2009). *Estudios sobre teoría social contemporánea: Bhaskar, Bourdieu, Giddens, Habermas y Melucci*. Buenos Aires: Ed. Ciccus.
- SINTES, Lila. (2009). Contactos interpersonales en la fase exploratoria del trabajo de campo. Congreso VIII RAM Reunión de Antropología del Mercosur. Universidad Nacional de San Martín. Buenos Aires, 29 de septiembre al 2 de octubre de 2009. (ponencia).
- SOMARRIBA, Gomes; GEZICA Valadares y REZENDE Afonso. (1984) *Lutas urbanas em Belo Horizonte*. Belo Horizonte, Brasil: Vozes.
- TILLY, Charles. (1985). "Models of realities of popular collective action". En *Social Research*, vol. 52, núm. 4.
- TOURAINÉ, Alain. (1987). *El regreso del actor*. Buenos Aires: Eudeba.

TURNER, Victor. (1982). "Social Dramas and stories about them". *From Ritual to Theatre. The human seriousness of Play*. New York: PAJ Publications.

VICHERAT, Daniela y SERRANO Claudia. (2000) *¿Qué motiva a la gente a actuar en común? Estudio sobre participación social en la población malaquias concha comuna de la granja*. Santiago. Documentos de trabajo. CIEPLAN. (Inédito).

---

## Notas

<sup>1</sup> En términos generales el *movimiento social urbano* refiere a un conjunto de prácticas de agentes urbanos articuladas en una coyuntura y que tiende objetivamente hacia la transformación estructural del sistema urbano o hacia una modificación sustancial del poder del Estado (Castells; 1988: 312).

<sup>2</sup> Monitoreo Programa de Acción para el Reasentamiento y Rehabilitación. (PARR) Informe social N° 4, marzo 2001. Convenio EBY- Faculta de Humanidades y Ciencias Sociales UNaM.

<sup>3</sup> Subsidio solicitado al Ente Provincia Regulador de Agua Potable y Cloacas (EPRAC).

<sup>4</sup> Construcción realizada a partir de un criterio extremadamente económico y eficientista.

<sup>5</sup> El diario El Territorio se hizo eco del problema, agregando "La falta de respuesta por parte de la EBY a estos habitantes del complejo, se suma el otro cachetazo que recibieron quienes reclamaban en Buenos Aires. Es que la Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda por 400 millones de dólares que habían entablado contra la EBY por daño socio ambiental en 1999".

<sup>6</sup> El subsidio de 12.000 pesos estuvo destinado a que las familias que habitan el sector poligonal del conjunto puedan arreglar algunos deterioros así como construir muros perimetrales, ampliar las viviendas, etc., entre otras modificaciones.

Fecha de recepción: 5 de septiembre de 2011. Fecha de aceptación: 6 de diciembre de 2011.